

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO
DEMANDADO	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP y COLPENSIONES.
RADICADO	05001-31-05-017-2022-00007-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Calculo actuarial, y reliquidación pensional
DECISIÓN	Revoca y condena.

Medellín, dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO** contra **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 044**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la demandante, contra la sentencia absolutoria que

profirió el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 2 de agosto de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS.

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la actora laboró desde el 20 de septiembre de 1982 hasta el 31 de julio de 2014, al servicio de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM ESP), en calidad de trabajadora oficial, sin embargo, dicha entidad solo efectuó el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en Pensiones se hasta el 30 de septiembre de 2013, y así se le informó a la actora mediante comunicación No. 2013076346 del 30-08-2013, lo anterior con fundamentado en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994, las recomendaciones de la Contraloría General de Medellín, la jurisprudencia existente sobre la materia, y la Circular Interna No. 1197 del 19 de junio de 2002, por haber cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez, EPM ESP.

Afirma la parte activa que la decisión unilateral e inconsulta del empleador, trasgredió el principio constitucional de buena fe (buena fe activa u objetiva), así como el de transparencia, lealtad y probidad, al no suministrar o enterar al trabajador, previo a suspender el pago de los aportes al sistema de pensiones, de toda la información necesaria, objetiva, completa, adecuada, suficiente, clara, comprensible, oportuna, y cierta sobre la posibilidad de decidir, u optar, por continuar cotizando o no al sistema pensional, a sabiendas de las consecuencias negativas que tal cese de cotizaciones implicaba frente al valor de la mesada pensional, los cuales quedaron evidenciadas cuando COLPENSIONES liquidó la pensión por \$5.468.483, a través de la resolución GNR-210364 de 2014, ordenando el ingreso en la nómina de pensionados, sin tener en cuenta todos los salarios devengados desde la fecha cesación de pagos de la pensión (01 de octubre de 2013), hasta la fecha de desvinculación laboral (31 de julio de 2014).

Señala también el libelo genitor que la decisión de EPM ESP de cesar las cotizaciones a la Seguridad Social en Pensiones, fue injusta, y generó incertidumbre en su poderdante, pues se proponía descargar en el salario del

trabajador el pago del 100% de los aportes en pensiones, lo cual era una decisión difícil de tomar ya que afectaba ostensiblemente su ingreso mensual, del cual dependía el sustento de su familia; desconociendo en todo caso, el grave impacto en la mesada pensional si dejaba de cotizar, y por ende el silencio de la demandante no debió tomarse como una respuesta de aceptación tácita.

Que EPM ESP no convocó a los trabajadores que estaban próximos a cumplir con los requisitos para pensionarse, y a quienes se les suspendería unilateral de los aportes a las Pensiones, a una reunión informativa sobre las implicaciones que tendría en el monto de la mesada pensional lo ordenado en la Circular 1197 de 2002, máxime que para aquella época, COLPENSIONES apenas empezaba a operar y estaba en empalme administrativo con el Seguro Social ISS, siendo de público conocimiento que las peticiones para que EPM continuara cotizando a la Seguridad Social en Pensiones, serían rechazadas o desestimadas por la Administración de la Entidad, dada la implementación de una política institucional.

Finalmente aduce el escrito inaugural que la política implementada por EPM ha sido censurada por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede verse en la sentencia SL2556-2020, del 8 de julio de 2020, reiterada en las sentencias SL5082-2020 del 30 de septiembre de 2020, SL1184-2021 del 15 de marzo de 2021, SL1271-2021 del 23 de marzo de 2021, SL2206-2021 del 26 de mayo de 2021 y SL3006-2021 del 14 de julio de 2021, y por tal motivo se agostó la reclamación administrativa ante EPM ESP y COLPENSIONES, con las cuales se busca la reliquidación de la mesada pensional con la inclusión de los aportes no cotizados por el empleador.

III. – PRETENSIONES

“1. PRETENSIONES DECLARATIVAS.

PRIMERA: DECLARE que mi poderdante tiene derecho al pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones por parte de su ex empleador EPM ESP, para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014.

SEGUNDA: DECLARE que la decisión de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP de suspender el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en pensiones, a partir del 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, fue una decisión unilateral y arbitraria, tomada sin la previa, expresa e informada aquiescencia o consentimiento de mi poderdante, vulnerando así el derecho que tenía a decidir de manera libre e informada (poder de decisión) si continuaba o no cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en los porcentajes establecidos en la ley 100 para el trabajador y empleador, abusando de sus prerrogativas legales, dominantes y subordinantes de la relación laboral.

TERCERA: DECLARE que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP al suspender unilateralmente el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en pensiones, a partir del 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, sin dar la oportunidad para que mi poderdante pudiese optar, y decidir libre, consciente, e informadamente, por seguir cotizando o no al fondo pensional administrado para la época por el ISS, y en los porcentajes establecidos en la Ley 100 de 1993 para el empleador y el trabajador, vulneró el derecho del trabajador a decidir u optar si continuaba o no cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, causando un grave perjuicio en su derecho a contar con una pensión digna, y proporcional al tiempo laborado en EPM ESP, incluyendo el total de los ingresos devengados desde el 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014.

CUARTA: DECLARE que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP incumplió su obligación de informarle a mi poderdante, previamente de su decisión de cesar los pagos de los aportes en pensiones de manera objetiva, completa, clara, comprensible, y cierta, de los riesgos y las potenciales y futuras consecuencias jurídicas desfavorables que tal determinación tendría en la cuantía de la futura mesada pensional, a fin de que este decida si desea o no hacer uso de la opción de continuar cotizando, en los porcentajes establecidos en la Ley 100 de 1993, (4% trabajador y 12% empleador).

QUINTA: DECLARE que la solicitud de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, para que los trabajadores le informaran por escrito si continuaban cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, de forma voluntaria, y con el pago del 100% de los aportes en Pensiones, es ineficaz, injusta, desproporcionada, e incompatible con los postulados establecidos en la Ley 100 de 1993.

SEXTA: DECLARE que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, al suspender unilateralmente el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones, a partir del 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, incumplió su obligación de mantener a mi poderdante afiliado y cotizando al sistema general de pensiones, al afectarle el derecho a decidir u optar por seguir cotizando voluntariamente, en los porcentajes previstos en la Ley 100 de 1993, mientras subsistió la relación laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.

SÉPTIMA: DECLARE que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, al suspender unilateralmente el pago de los aportes a la seguridad social integral en pensiones, a partir del 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, afectó el derecho de mi poderdante a obtener una mejor liquidación e incremento de su mesada pensional, que de haberse

tenido en cuenta todos los salarios devengados a partir del 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014.

OCTAVA: DECLARE que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP al cesar unilateralmente las cotizaciones a la pensión, trasgredió el principio constitución a de buena fe, así como el de transparencia, lealtad y probidad, pues no actuó con lealtad con los legítimos intereses de mi poderdante a obtener una justa y merecida mesada pensional, acorde con la inclusión en la liquidación de la pensión de todos los salarios devengados hasta la finalización de su relación laboral, y al no informarle a mi poderdante la posibilidad de decidir, u optar, por continuar cotizando o no al sistema pensional, en los porcentajes establecidos en la Ley 100 de 1993,(4% trabajador y 12% empleador), de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-529 del 23 de junio de 2010 (Anexos 8).

NOVENA: DECLARE que a los hechos, pretensiones, pruebas, y consideraciones jurídicas del presente caso, le es aplicable como caso análogo, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, lo decidido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia con radicado SL2556-2020, radicación interna No.69645, del 8 de julio de 2020, Magistrada Ponente Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, mediante la cual se decidió una demanda de casación en contra de EPM ESP, doctrina reiterada en las sentencias SL5082-2020 del 30 de septiembre de 2020, SL1184-2021 del 15 de marzo de 2021, SL1271-2021 del 23 de marzo de 2021, SL2206-2021 del 26 de mayo de 2021 y SL3006-2021 del 14 de julio de 2021.

DÉCIMA: DECLARE que de acuerdo con lo decidido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia de CasaciónSL2556-2020, del 08 de julio de 2020, el artículo 2.2.3.1.1. del Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, entre estas el contenido del artículo 19 el Decreto 692 de 1994, es incompatible con lo prescrito en con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.

UNDÉCIMA: DECLARE que Colpensiones debe efectuar un nuevo cálculo del Ingreso Base de Liquidación -IBL-de los últimos 10 años laborados por mi poderdante hasta el 31 de julio de 2014, incluyendo la totalidad de los ingresos percibidos para el período el 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, para efectos del incremento y pago de la mesada pensional con la respectiva indexación, y el pago a mi poderdante a título de retroactivo pensional del valor adicional de lo que hoy se está pagando por concepto de mesada pensional desde el 31 de julio de 2014.

2. PRETENSIONES DE CONDENA.

DUODÉCIMA: CONDENE a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP para que liquide a favor de mi poderdante, y gire a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, todos los aportes a la Seguridad Social en Pensiones dejados de cotizar, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014, a través del cálculo actuarial que debe ser realizado con base en los salarios que devengaba en el referido periodo, debidamente indexados.

DÉCIMA TERCERA: CONDENE a Colpensiones a emitir y notificar a EPM ESP la liquidación del cálculo actuarial, para que luego de efectuado el pago por EPM.COLPENSIONES incorpore en la historia laboral de mi poderdante los períodos no cotizados 01 de octubre de 2013 hasta el 31 de julio de 2014.

DÉCIMA CUARTA: Efectuado el nuevo cálculo del Ingreso Base de Liquidación IBL- de los últimos 10 años laborados por mi poderdante hasta el 31 de julio de 2014, CONDENE a COLPENSIONES a pagar a mi poderdante el valor adicional de lo que hoy se está pagando por concepto de mesada pensional desde el 31 de julio de 2014, debidamente indexados, con los intereses moratorios del artículo 23 de la ley 100 de 1993.

DÉCIMA QUINTA: CONDENE en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., contestó oportunamente a través de su apoderada judicial (fls. 3 al 39 del archivo PDF 007), manifestando frente a los hechos expuestos, que son ciertos aquellos que aluden a la edad de la demandante, su vinculación con la entidad y los extremos, su calidad de pensionada por vejez a cargo de COLPENSIONES y el agotamiento de la reclamación administrativa; afirmó no ser cierto que EPM en forma unilateral y arbitraria haya decidido cesar en los aportes en pensiones desde octubre de 2013, pues tal decisión tuvo como soporte el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 292 de 1994, las cuales facultaban al empleador para cesar en los aportes pensionales, toda vez que su trabajador ya contaba para aquel entonces con la edad pensional y el tiempo de servicios, adicionalmente mediante circular 1197 de 2002, el gerente general de la empresa le había informado a todos los trabajadores la decisión de suspender las cotizaciones frente a aquellos trabajadores beneficiarios del régimen de transición que cumplan los requisitos pensionales, circular que se expidió para dar cumplimiento a un requerimiento que en este sentido hiciera la Contraloría General de Medellín, circunstancia que en el caso específico de la actora, le fue informada mediante misiva del 30 de agosto de 2013, quien no manifestó su intención de continuar cotizando. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones contenidas en la demanda, proponiendo en su defensa las excepciones que denominó: “*VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA POR APLICACIÓN*

RETROACTIVA DEL PRECEDENTE JUDICIAL. PROHIBICIÓN DE APLICAR EL PRECEDENTE DE MANERA RETROACTIVA; FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA; CARENCIA DE ACCIÓN Y DERECHO SUSTANCIAL PARA PEDIR; INEXISTENCIA SUSTANCIAL DEL DERECHO; PAGO TOTAL; COTIZACIONES PARA EFECTOS PENSIONALES REALIZADAS, DE MANERA COMPLETA, EN TÉRMINOS DE LA LEY QUE REGULA LA MATERIA; y PRESCRIPCIÓN”.

A su turno, la apoderada judicial de COLPENSIONES, también recorrió el traslado otorgado en forma oportuna, según consta a folios 2 al 13 del archivo PDF 008, admitiendo como ciertos los hechos relativos a la edad de la demandante, su calidad de pensionada en el riesgo de vejez mediante resolución N° GNR-210364 de 2014, así como el agotamiento de la reclamación administrativa, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, pues algunos de ellos aluden a circunstancias acontecidas frente a un empleador, que la administradora pública de pensiones no tiene por qué conocer. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones contenidas en la demanda, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES; FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; IMPROCEDENCIA PAGAR INTERESES MORATORIOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993; PRESCRIPCIÓN; BUENA FE COLPENSIONES; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; COMPENSACIÓN INDEXADA Y PAGO; IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS; y la INNOMINADA O GENÉRICA”*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, la juez *A Quo* en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 2 de agosto de 2022, ABSOLVIÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., de todas las suplicas de la demanda interpuesta por la señora MARIA CRISTINA VILLA PALACIO, absteniéndose de imponer costas procesales en la primera instancia.

Como fundamento de su decisión, que de conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley 100 de 1993, mientras esté vigente la relación laboral el empleador se encuentra obligado a efectuar aportes al sistema de seguridad social integral, adicionalmente el art. 22 ibídem, ordena al empleador a retener los pagos del trabajador al sistema de seguridad social, coligiendo igualmente que la excepción a esa regla general, la trae el art. 17 de la Ley 100 de 1993, y se presenta cuando la persona reúne los requisitos para acceder a la pensión, no obstante, en aquellos eventos el empleador le debe consultar al trabajador si desea seguir o no cotizando, y si este último desea seguir cotizando, el empleador deberá acompañarlo con el porcentaje del aporte correspondiente (8%), así lo dejo en claro la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede verse en las sentencias SL2556-2020, SL2206-2021, SL1184-2021, y SL3006-2021, donde deja en claro el órgano de cierre, acerca del deber que tiene el empleador de informarle al trabajador sobre el cese de los aportes, y la incidencia de estos últimos en el cálculo del Ingreso base de liquidación.

Pero al descender al caso concreto de la señora MARIA CRISTINA VILLA PALACIO, estimó la juez de primer grado que su situación era atípica, pues contrario a lo que sí ocurrió con otros trabajadores de EPM ESP a los que se les reconoció la pensión a partir del retiro del servicio, a la demandante le fue otorgada la pensión de vejez a partir del retiro del sistema general de pensiones, lo que implicó para ella el pago de un retroactivo pensional en simultaneidad con el salario que percibía de EPM, el reconocimiento de ese retroactivo, también dio lugar a una demanda judicial donde se recamaron intereses moratorios sobre ese mismo retroactivo del que ahora se afirma no fue pagado.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El apoderado judicial de la demandante, refiere no estar de acuerdo con la decisión de primera instancia, insistiendo en que el cese de las cotizaciones al sistema general de pensiones que operó a partir del 1 de octubre de 2013, se dio en forma inconsulta, pues no se le dio a la trabajadora la oportunidad de

manifestarse si quería continuar realizando aportes pensionales, la carta sobre la cesación de pago fue posterior, EPM se guardó la información, desconociendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 2010.

Solicita la aplicación de tesis de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, analizadas por la juez de primer grado, las cuales constituyen doctrina probable, pues en su criterio la demandante también reúne los mismos requisitos para acceder a reliquidación de su mesada pensional con la inclusión de los aportes no efectuado a COLPENSIONES, y no le era dable a la juez de primer grado negar las pretensiones formuladas, aduciendo que la actora percibió pensión en simultaneidad con el salario, pues en realidad el valor del retroactivo pensional inicialmente reconocido por COLPENSIONES fue reversado por esa misma entidad, y para verificarse esta última situación, solicita se decrete una prueba de oficio, para que sea COLPENSIONES quien certifique si a la actora se le pago o no un retroactivo pensional, máxime que la carga de la prueba en tal sentido recaía en COLPENSIONES.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, a través de los cuales solicita se confirme la sentencia absolutoria de primer grado, pues según refiere la suspensión de aportes en pensiones de la demandante no fue ilegal, ni inconstitucional, ni tampoco fue de mala fe, ni mucho menos se hizo alguna maniobra fraudulenta o temeraria al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Es más, la misma sentencia SL2556 de 2020 permite la cesación de aportes, pero con unos requisitos adicionales a lo establecido el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003.

Y solo en caso de accederse a las pretensiones de la demanda, solicita se ordene el pago de un cálculo actuarial, sino al pago de aportes en pensiones de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esto es, EPM pagará el 75% de la cotización total y el demandante el 25% del total

de la misma, es decir, con el 4% sobre el ingreso base de cotización a tener en cuenta, y mediante el pago de aportes al sistema pensional, tal y como así lo establece el artículo 17 de la Ley 549 de 1999.

Finalmente, y en relación a la respuesta dada por COLPENSIONES a la prueba de oficio decretada en segunda instancia, según la cual la demandante no recibió el retroactivo, no cabe duda que la accionante si logró un beneficio en otra acción judicial derivado de unos intereses moratorios, tal como lo indicó en el interrogatorio de parte que absolviera ante la A quo.

A su turno, el apoderado judicial de la demandante, expone los argumentos de hecho y derecho por los cuales considera se debe revocar la decisión de primera instancia, y accederse a las pretensiones contenidas en la demanda, pues la tesis del doble pago en la cual se amparó la A Quo para proferir la sentencia absolutoria, no resulto ser cierta, pues según la respuesta dada por COLPENSIONES a la prueba oficiosa decretada en segunda instancia, se logró evidenciar que esta última entidad ordenó la suspensión de los pagos a la pensión, es decir, la actora en ningún momento percibió salario y pensión en simultaneidad.

Finalmente, la apoderada judicial de COLPENSIONES Dra. Sandra Milena Naranjo Salazar portadora de la T.P. 225.677 del C.S. de la J., a quien se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario, presentó sus alegaciones finales, solicitando se confirme la decisión absolutoria, pues considera que fue EPM quien desconoció el derecho de la demandante de seguir cotizando voluntariamente a la pensión desde el 01 de octubre de 2013 hasta la fecha del retiro definitivo del servicio el 31 de julio de 2014, pues unilateralmente tomó la decisión de cesar cotizaciones, lo que causó que Colpensiones al reliquidar la pensión no tomara en cuenta las cotizaciones de ese tiempo anteriormente descrito y por ende el demandante pierde la posibilidad de mejorar el monto de la pensión de vejez, y que si bien no cabe duda que la petición de recibir los aportes a la seguridad social tiene como soporte la existencia de un vínculo laboral o que el mismo no obedece a la realidad, lo que a la fecha no se ha demostrado en el proceso de la referencia, pues se discuten las causales de

desvinculación y el derecho a reintegro; así las cosas, se eleva ante la jurisdicción una petición prematura o antes de tiempo.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver, previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Cálculo actuarial a cargo del empleador, reliquidación pensional con la inclusión de un tiempo laborado y no cotizado: Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Planteado el recurso de apelación tal y como se encuentra, los problemas jurídicos estriban en dilucidar: **i)** si en realidad el empleador codemandado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP se encontraba facultado legalmente para cesar en forma definitiva el aporte obligatorio al sistema general de pensiones, a favor de la demandante MARIA CRISTINA VILLA PALACIO una vez esta cumplió los requisitos pensionales de edad y semanas cotizadas y/o tiempo de servicios, y en caso negativo, **ii)** se adentrará la Sala en estudiar la procedencia o no de la reliquidación pensional con la inclusión de los aportes no efectuados a COLPENSIONES por el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 2013 al 31 de julio de 2014, y las demás pretensiones consecuenciales relativas al pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el mayor valor de la mesada pensional no pagado, o en subsidio la indexación de las condenas.

Se partirá entonces del análisis del precepto legal que ha generado la controversia, esto es, el **artículo 17 de la Ley 100 de 1993**, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, que en su tenor literal expone lo siguiente:

“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.”

Y el art. 19 del Decreto 692 de 1994 prescribe que:

“Artículo 19. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores.

En el caso del régimen solidario de prima media con prestación definida, la obligación de cotizar cesa cuando el afiliado cumpla los requisitos para obtener su pensión de vejez o cuando el afiliado se pensione por invalidez. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, a su cargo, hasta por cinco años adicionales para aumentar el monto de su pensión.

En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, la obligación de cotizar cesa cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivientes o cuando el afiliado opte por pensionarse anticipadamente. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, en cuyo caso el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dura la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta dos (62) años de edad si es hombre.”

Valga recordar que en la sentencia **C-529 de 2010**¹, la H. Corte Constitucional, se pronunció frente al alcance del artículo 17, indicando entre otros argumentos los siguientes:

“La disposición demandada establece una causal de extinción de la obligación que tienen los afiliados, empleadores y contratistas para con los regímenes del sistema general de pensiones. La obligación consiste en efectuar obligaciones (sic) obligatorias a ellos durante la vigencia de

¹ Se fija el alcance de lo señalado en los incisos 2º y 3º del artículo 4º de la Ley 797 de 2003 y los declara exequibles.

la relación laboral y del contrato de prestación de servicios. Esta obligación de cotizar cesa, según la disposición demandada, al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez.

“(…)

“Interpretada la disposición demandada –según la cual “la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez”- en consonancia con los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, se concluye que en el régimen de prima media con prestación definida, los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez son aquellos que permiten al afiliado adquirir el derecho a la pensión, sin perjuicio de que éste, con un esfuerzo adicional, logre incrementar su monto.

“(…)

“Adicionalmente, el artículo demandado contempla la posibilidad de que el empleador o el afiliado puedan seguir haciendo aportes voluntarios, aun si se han reunido los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez. Esta posibilidad permite que quienes opten por esa alternativa, sigan contribuyendo al sistema, no sólo en su propio beneficio, sino a favor de sus esquemas solidarios. En tal evento, lo harán, ya no obligatoriamente, sino por decisión propia, lo que es consecuente con el hecho de que ya se han satisfecho los requisitos para acceder a la pensión y han pasado, legítimamente, a ser beneficiarios del sistema.

“(…)

Entonces, cuando el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 señala que la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para la pensión, consagra una regla clara reguladora del evento en que el afiliado al sistema pensional siga vinculado laboralmente, a pesar de haber reunido los requisitos de acceso a la pensión. En esta hipótesis, la obligación de cotizar al sistema desaparece, lo cual no se altera, aun cuando continúe una relación laboral o de contrato de prestación de servicios. En tal evento, el inciso tercero de la norma permite que se sigan haciendo aportes voluntarios por parte del trabajador.

En este mismo sentido pronuncio en su momento la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (véase sent. SL3088-2014, rad. 40054 del 12 de marzo de 2014), Corporación que al estudiar el derecho de los servidores públicos a no ser retirados del servicio por el reconocimiento de pensión con requisitos de Ley 33 de 1985 hasta cumplir 60 años de edad, implícitamente se pronunció sobre el tema que ahora se debate, señalando al respecto lo siguiente:

*“(…) observa la Sala que el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 reconocía expresamente una estabilidad laboral similar a la que se ha venido hablando, en la medida que establece la prohibición de obligar al trabajador a pensionarse antes de cumplir 60 años de edad. Dice textualmente el citado inciso: “En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno”. De lo anterior se colige que la estabilidad contenida en el pre transcrito inciso sobre la cual funda, principalmente, su acusación la censura es muy similar a la contenida en el artículo 33 original de la Ley 100 de 1993, pues en la práctica ambas normas someten el retiro por pensión a una condición suspensiva, **pues le conceden al trabajador, con requisitos de pensión, la opción de seguir cotizando un tiempo adicional para mejorar su beneficio e impiden su retiro del servicio en contra de su voluntad, cuando apenas cumple las condiciones para adquirir el derecho**”.*

Y luego en la sentencia SL1582-2018, esta misma corporación coligió que el empleador estaba facultado para suspender unilateralmente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez su trabajador cumpliera con los requisitos legales para causar una pensión de vejez, siendo deber del trabajador informarle a su empleador la intención de seguir efectuando:

“...La norma no impone al empleador la obligación de anunciar la cesación del pago de los aportes, porque lo que regula es el fin de la obligación de pagar cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales y, en caso de que hubiera optado el demandante por continuar cotizando para mejorar el IBL de la pensión de vejez, le bastaba informar al Municipio de Medellín, para que se suscitara la obligación de hacerlo más allá de la fecha en que reunió los requisitos...”

Sin embargo, este criterio jurisprudencial fue revaluado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL2556 del 8 de julio de 2020, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo en la cual clarificó que el cese de cotizaciones al sistema general de pensiones al que alude el art. 17 de la Ley 100 de 1993, solo era viable, en aquellos eventos donde el empleador hubiese informado al trabajador de tal proceder, y las implicaciones de esa suspensión tendría frente al valor de la futura prestación económica, veamos:

“...A la luz de lo explicado, si bien el empleador puede dejar de cotizar al sistema general de pensiones cuando el trabajador cumple los requisitos

pensionales, está en la obligación de informarle previamente a fin de que este decida si desea o no hacer uso de la opción de continuar cotizando. De lo contrario, la facultad consagrada en su favor en el inciso 3.º del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 se tornaría nugatoria si el empleador de forma unilateral e inconsulta así procede.

Adicionalmente, en virtud de la buena fe contractual, y con el fin de que el trabajador pueda ejercer la opción de manera informada y consciente, el empleador que pretenda suspender el pago de aportes al sistema de pensiones, conforme lo previsto en el inciso 2.º del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, previamente deberá advertir al trabajador que tal actuar puede alterar el monto de la prestación...”

Este nuevo criterio jurisprudencial ha sido reiterado en providencias más recientes como las SL5082-2020, SL1184-2021, SL3006-2021, SL177-2023 y SL1205-2023, entre otras.

CASO CONCRETO:

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la señora MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO, nació el 13 de septiembre de 1958, por lo que cumplió 55 años el mismo mes y día del año 2013.

También está probado que el empleador EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, mediante comunicado del 30 de agosto de 2013 (folios 81 del archivo PDF 001), le hizo saber a la demandante que cesaría a su favor los aportes al sistema general de pensiones a partir del 1º de octubre de 2013, y que si deseaba seguir efectuando aportes debía informarlo antes del 30 de septiembre de 2013, los cuales estarían totalmente a su cargo, sin advertirle allí, sobre las implicaciones que tendría este cese de cotizaciones en el valor de su mesada pensional, veamos:

Radicado 2013076346
C.A 5180

30 de agosto de 2013

Señora
MARIA CRISTINA VILLA PALACIO
Centro de Actividad 2930 UN.INFORMATICA ENERGIA
Registro: 951836

Asunto: Cesación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a partir del 01 de octubre de 2013.

Atendiendo las disposiciones legales, y considerando que ya cumples con las condiciones de edad y tiempo de prestación de servicios para acceder a tu pensión, es nuestro deber cesar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Si tu deseo es continuar cotizando, será posible hacerlo en forma voluntaria y con la totalidad del aporte a cargo tuyo, condición que deberás informar por escrito antes del 30 de septiembre de 2013 a la Unidad Protección Social, con el fin de registrar la novedad correspondiente.

Te invitamos a ponerte en contacto con Luz Adriana Gómez Gómez, de la Unidad Protección Social EPM, para que traigas la documentación necesaria y te brinde la asesoría pensional.

Se adjunta fotocopia de la Circular 1197 de 2002.

Cordial saludo,

CARLOS IGNACIO CORREA VALENCIA
Jefe Unidad Protección Social

Este cese de cotizaciones, anunciado por el empleador fue materializado el día 30 de septiembre de 2013, cuando se reportó la novedad de retiro “R”, según consta en la HISTORIA LABORAL aportada por COLPENSIONES, visible a folios 232 del archivo PDF 008, veamos:

890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Si	201307	13/08/2013	84C20006030573	\$ 7.584.000	\$ 1.212.300	\$ 0	30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Si	201308	11/09/2013	84C20006604946	\$ 7.505.000	\$ 1.199.600	\$ 0	30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Si	201309	10/10/2013	84C20007188807	\$ 7.566.000	\$ 1.210.900	\$ 0	R	30	Pago aplicado al periodo declarado

Luego el 14 de noviembre de 2013, la señora MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO solicitó pensión de vejez ante COLPENSIONES, y dicha entidad mediante resolución N° GNR-210364 del 10 de junio de 2014, accedió a su reconocimiento, a partir del 1° de octubre de 2013 (día siguiente a la última cotización), en calidad de beneficiaria del régimen de transición pensional del art. 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el acuerdo 049 de 1990, dicha prestación fue liquidada teniendo en cuenta 1.714 semanas de cotización, un IBL de \$6.751.214, una tasa de reemplazo del 81%, lo que dio como resultado una mesada pensional de \$5.468.483.

En dicho acto administrativo también se anunció el reconocimiento y pago de un retroactivo pensional por valor de \$44.433.192, que sería ingresado en la nómina del periodo 2014-06 que se paga en el periodo 2014-07, así:

LIQUIDACION RETROACTIVO	
CONCEPTO	VALOR
Mesadas	44,278,309.00
Mesadas Adicionales	5,468,483.00
F. Solidaridad Mesadas	0.00
F. Solidaridad Mesadas Adic	0.00
Descuentos en Salud	5,313,600.00
Pagos ya efectuados	0.00
Valor a Pagar	44,433,192.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201406 que se paga en el periodo 201407 en la central de pagos del banco BANCOLOMBIA CENTRAL DE PAGOS de CP MEDELLIN LA AMERICA-CRA 86 A 43-77.

No obstante, y según lo certificó COLPENSIONES en respuesta al auto del 2 de octubre de 2023 mediante el cual se decretó una prueba de oficio, **estos dineros girados a favor de la demandante para la nómina del periodo 2014-06, fueron devueltos por la entidad bancaria, presentándose una suspensión de la pensión hasta el 31 de julio de 2014, veamos:**

BANCOLOMBIA CENTRAL DE PAGOS		CUPON DE PAGO No. 0		
42975880		MES	AÑO	PAGUESE HASTA 27/09/2014
CIUDAD/DPTO MEDELLIN / ANTIOQUIA		6	2014	
IDENTIFICACION CC 42975880		SUCURSAL CP MEDELLIN LA AMERICA-CRA 86 A 43-77		
NOMBRE PENSIONADO MARIA CRISTINA VILLA PALACIO				
COD.	CONCEPTOS	INGRESOS	EGRESOS	
10	(9160) P DE VEJEZ-758 REG TRAN-MUJER - VALOR PENSION	5,574,572.00		
20	SALUD - E P MEDELLIN		669,000.00	
40	SALUD RETROACTIVO - E P MEDELLIN		5,313,600.00	
160	NOTA DEBITO	49,746,792.00		
Línea de Atención al Pensionado:		55,321,364.00	5,982,600.00	
Medellin (4)283 5090, Bogota (1)489 0909, Resto del pais 018000 41 0909 Página Web: www.colpensiones.gov.co - Ayuda al ciudadano / Atención al ciudadano		NETO A PAGAR	49,338,764.00	

Ahora bien, el valor girado en ese periodo fue **devuelto** por la entidad financiera por no pago.

La pensión, registra **suspensión** en el periodo de **julio de 2014**, estado en que continuó hasta el periodo de **agosto de 2014**, en el que fue **reactivada**.

Significa lo anterior, que, a pesar de haberse ordenado por error un disfrute de la pensión de vejez a partir del día siguiente a la última cotización, en la práctica dicha prestación económica, solo empezó a pagarse al día siguiente de haberse acreditado el retiro de la entidad oficial, como legalmente correspondía, dada la calidad de trabajadora oficial que detentaba la demandante, por lo que no resultan validos los argumentos en los que se afianzó la juez *A Quo* para negar las pretensiones, pues ese doble pago, no se presentó en el *sub lite*, mismo que, de haberse suscitado, tampoco daba lugar a negar el derecho a la reliquidación pensional, y muchos menos podía servir como sustento de tal negativa, el reconocimiento de intereses moratorios ordenados por el JUZGADO SEXTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE MEDELLIN mediante fallo de fecha 8 de octubre de 2020, pues estas circunstancias no configuran una cosa juzgada

frente a la pretensiones de cálculo actuarial a cargo del empleador, y reliquidación pensional a cargo de la administradora de pensiones, ni constituyen un motivo de incompatibilidad como equivocadamente lo entendió la funcionaria judicial de primer grado.

Sin embargo, es pertinente advertir que a esta Sala no le compete determinar si la actora se valió o no del retroactivo anunciado en la resolución N° GNR-210364 del 10 de junio de 2014, para hacerse a unos intereses moratorios que no le correspondían, pues dicha problemática desborda la competencia en segunda instancia, y por ello será COLPENSIONES la única legitimada para adelantar las acciones judiciales que estime pertinentes en aras de recobrar lo que considere haber pagado en exceso a la demandante.

Estando claro lo anterior, y no existiendo prueba que la señora MARIA CRISTINA VILLA PALACIO, hubiese consentido expresamente el cese de las cotizaciones en pensiones a partir del 30 de septiembre de 2013, y mucho menos que su empleador EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, le hubiese asesorado acerca de las eventuales implicaciones que tendría en su mesada pensional ese no pago de aportes hasta la fecha de su retiro de la entidad oficial, se dan los presupuestos jurisprudenciales para acceder a las pretensiones de la demanda, advirtiendo la Sala que las omisiones del empleador de manera alguna puede entenderse convalidadas con la solicitud pensional que hiciera la actora el 14 de noviembre de 2013, así se precisó en sentencia CSJ SL5082-2020, en la que se señaló:

“...Por otra parte, a juicio de la Sala, el Colegiado de instancia respaldó el criterio del a quo conforme al cual la solicitud que realizó el trabajador afiliado para acceder al derecho pensional, materializó su voluntad de dejar de cotizar al sistema.

Sin embargo, tal postura desconoce que en atención a los postulados de buena fe que debe irradiar a la relación laboral, la decisión del trabajador sobre este punto tiene que ser libre, consciente y completamente informada, tal como se indicó en el precedente judicial citado; y ello solo se predica si su empleador cumple el deber que tiene de informarle acerca de las consecuencias jurídicas que esa importante determinación puede acarrear en su situación pensional...”

Así las cosas, debe concluirse que la actora si tiene derecho al pago de los aportes pensionales que reclama por el periodo comprendido entre el 1° de

octubre de 2013 al 31 de julio de 2014, representados a través del cálculo actuarial que debe asumir EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, incluyendo allí, la asignación básica, y demás factores salariales a los que tuviere derecho la demandante en ese interregno de tiempo de conformidad con el art. 1° del Decreto 1158 de 1994.

Excepción de prescripción

En relación a la excepción de prescripción, propuesta por ambas accionadas deber decirse que la reliquidación de la pensión de vejez en virtud del pago del cálculo actuarial es un derecho imprescriptible, por formar parte del capital indispensable para el reconocimiento de la pensión que es de carácter vitalicia, siendo este el entendimiento dado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede verse en las sentencias CSJ SL941-2018 – CSJ SL738-2018, SL3548-2020

SL738-2018:

“...De allí que, en lo que al ámbito jurídico concierne, el Tribunal estimó, en últimas, que los reclamos relacionados con la falta de afiliación al sistema de pensiones o la falta de pago de los aportes, junto con las consecuencias derivadas de dichas omisiones, están sometidos a la prescripción extintiva total, cuyo término debe comenzar a correr desde la consolidación del derecho pensional, porque se trata de factores económicos que integran la base salarial tenida en cuenta para calcular el monto de la prestación.

Tras dicha reflexión, a no dudarlo, el Tribunal incurrió en los errores jurídicos que denuncia la censura, porque, en primer término, se valió de un precedente que no resultaba aplicable a la situación en disputa y, en segundo lugar, desconoció que, en tratándose de aportes pensionales omitidos, en tanto se constituyen como parte fundamental para la financiación y consolidación del derecho a la pensión, no resulta dable aplicar la prescripción sobre el derecho, como tal, sino tan solo sobre las mesadas o eventuales reajustes dejados de cobrar oportunamente...”

Criterio jurisprudencial que acoge y comparte esta colegiatura, y dado que la reclamación administrativa ante COLPENSIONES se efectuó el día 2 de noviembre de 2021, y que la demanda ordinaria laboral se presentó el día 11 de enero de 2022, solo está llamada a operar una prescripción parcial sobre aquel mayor de la mesada pensional causado con anterioridad al 2 de noviembre de

2018, en atención al término trienal de prescripción regulado en materia laboral y seguridad social por los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

Tampoco se comparte el argumento expuesto por la apoderada judicial de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., según el cual dicha entidad solo estaría obligada a pagar el porcentaje del aporte que le correspondía como empleador, pues dicha tesis resulta contraria a la jurisprudencia nacional, misma que tiene establecido que el CÁLCULO ACTUARIAL, debe ser asumido en su TOTALIDAD por el empleador, aun cuando ni siquiera tuviere la obligación de afiliación (sentencia SL-3547 del 22 de agosto de 2018, con radicación 68.421, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO), veamos:

“...De entrada, se advierte que de manera reiterada, la jurisprudencia de esta Sala ha estimado que es viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones en algunos lugares de la geografía nacional, sean computados a través de cálculos actuariales representados en títulos pensionales a cargo del empleador, con el fin de que el trabajador complete la densidad de cotizaciones exigida por la ley; esto es, bajo el entendido que el derecho a la seguridad social es irrenunciable e inalienable...”

Y es que la figura del CÁLCULO ACTUARIAL, impide que el trabajador tenga que soportar las consecuencias por la falta de afiliación o pago de aportes atribuible a su empleador, y, en consecuencia, garantiza que sus derechos mínimos e irrenunciables no se vean afectados por dicha omisión, pues a través de esa institución, el legislador permite que el periodo en que no se hicieron los aportes a un fondo pueda contabilizarse dentro de su historial de semanas de cotización. De ahí que constituye una solución equilibrada para los casos de omisión de la afiliación, dado que no solo permite materializar la finalidad del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, sino la sostenibilidad del mismo, sin perjuicio de las prerrogativas de los trabajadores².

Para lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar se accederán a las pretensiones irrogadas, otorgándole a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., un plazo de 10 días calendario contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, para solicitar a COLPENSIONES la

² Corte Suprema de Justicia - Sentencia **STL11357-2021**.

elaboración del cálculo actuarial correspondiente; con esta solicitud deberá adjuntarse la información salarial correspondiente incluidos los factores salariales devengados por la señora MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO entre el 1° de octubre de 2013 y el 31 de julio de 2014.

Una vez radicada la solicitud de cálculo actuarial ante COLPENSIONES, dicha administradora tendrá un plazo de 20 días calendario para su elaboración y notificación al empleador, y este último deberá proceder con el pago del mismo dentro de los 30 días siguientes.

Una vez esto ocurra, COLPENSIONES tendrá un plazo de 30 días para actualizar la historia laboral de la demandante, y reliquidar su mesada pensional con el promedio de los últimos 10 años conforme lo señalado en el art. 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión del tiempo laborado y no cotizado entre el 1° de octubre de 2013 y el 31 de julio de 2014, advirtiéndole que el eventual mayor valor de la mesada pensional deberá pagarse a partir del 2 de noviembre de 2018, en atención a la excepción de prescripción acogida parcialmente.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la prosperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la demandante, las costas procesales en ambas instancias estarán a cargo de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y a favor de la señora MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO, de conformidad con el numeral 1° del art. 365 del Código General del Proceso, en esta instancia se fijan como como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 equivalente a 1 SMLMV para la anualidad 2023, las de primera instancia deberán ser calculadas por el juzgado de origen en atención a lo aquí resuelto. Se abstiene la Sala de imponer costas procesales a COLPENSIONES, pues esta administradora fue ajena a la decisión unilateral del empleador de cesar los aportes al sistema general de pensiones a partir del 30 de septiembre de 2013.

VIII - DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia objeto de apelación de fecha 2 de agosto de 2022 proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto ABSOLVIÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., de todas las suplicas de la demanda interpuesta por la señora MARIA CRISTINA VILLA PALACIO, para en su lugar, CONDENAR a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., al cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 2013 y el 31 de julio de 2014, y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reliquidar la mesada pensional de la demandante con la inclusión de estos aportes, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Para cumplir con lo anterior EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., contará con un plazo de 10 días calendario contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, para solicitar a COLPENSIONES la elaboración del cálculo actuarial correspondiente; con esta solicitud deberá adjuntarse la información salarial correspondiente incluidos los factores salariales devengados por la señora MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO entre el 1° de octubre de 2013 y el 31 de julio de 2014.

Una vez radicada la solicitud de cálculo actuarial, COLPENSIONES, tendrá un plazo de 20 días calendario para su elaboración y notificación al empleador, y este último deberá proceder con el pago dentro de los 30 días siguientes.

Ocurrido el pago del cálculo actuarial, COLPENSIONES tendrá un plazo de 30 días para actualizar la historia laboral de la señora MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO, y reliquidar su mesada pensional con el promedio de los últimos 10 años, con la inclusión del tiempo laborado y no cotizado entre el 1° de octubre de 2013 y el 31 de julio de 2014, y los factores salariales a los que haya lugar de conformidad con el Decreto 1158 de 1994, advirtiéndole que el eventual mayor valor de la mesada pensional deberá pagarse a partir del 2 de noviembre de 2018, según lo expuesto en precedencia.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la apoderada judicial de COLPENSIONES, respecto al eventual mayor valor de la mesada pensional causado con anterioridad al 2 de noviembre de 2018, según lo expuesto en precedencia.

CUARTO: Costas en ambas instancias a cargo de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y a favor de la señora MARÍA CRISTINA VILLA PALACIO, en esta instancia se fijan como como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 equivalente a 1 SMLMV para la anualidad 2023, las de primera instancia deberán ser calculadas por el juzgado de origen en atención a lo aquí resuelto.

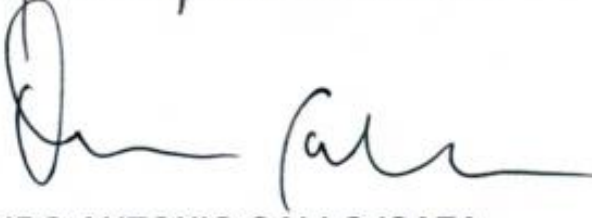
QUINTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SEXTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA